

Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

19 de noviembre de 2012
Español
Original: inglés

12ª Reunión

Ginebra, 3 a 7 de diciembre de 2012

Tema 10 del programa provisional

Examen de la situación general y el funcionamiento de la Convención

El logro de los propósitos del Plan de Acción de Cartagena: Informe de Ginebra sobre la marcha de los trabajos 2011-2012

Presentado por el Presidente designado de la 12ª Reunión de los Estados Partes*

Sección 2

Remoción de minas y asistencia a las víctimas

III. Remoción de minas

1. El Informe de Phnom Penh sobre la marcha de los trabajos dejó constancia de que, al 2 de diciembre de 2011, 36 Estados partes habían notificado que les incumbía la obligación prevista en el artículo 5, párrafo 1, de la Convención. Asimismo, en el Informe se indicó que, además de esos 36 Estados partes, otros 2, Alemania y Hungría, habían comunicado a los Estados partes que sospechaban de la presencia de minas antipersonal en algunas zonas bajo su jurisdicción o control.

2. Desde la REP11, [cuatro] Estados partes, Dinamarca, Guinea-Bissau, Jordania y [Uganda], notificaron que habían completado la aplicación del artículo 5. La tarea de desminado a la que se enfrentaba Dinamarca implicaba la limpieza de 186 ha de terreno donde se conocía o se sospechaba la presencia de minas en la Península de Skallingen, una zona protegida que goza de reconocimiento internacional debido a su importancia medioambiental. Para aplicar el artículo 5, Guinea-Bissau debía limpiar o declarar seguros por otros medios 6,5 millones de metros cuadrados de terreno donde se conocía o se sospechaba la presencia de minas antipersonal, y destruir 3.973 minas antipersonal, 364 minas de otro tipo y otros 331.591 restos explosivos de guerra (REG). En cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 5, Jordania despejó más de 60 millones de metros

* Este documento se presenta después del plazo establecido para permitir que los Estados partes faciliten información detallada sobre sus actividades.

cuadrados de terreno donde se conocía o se sospechaba la presencia de minas, y posteriormente destinó las zonas despejadas a grandes proyectos de desarrollo, principalmente para la agricultura, los peregrinajes religiosos y el turismo. [...]

3. Asimismo, desde la REP11, Alemania notificó oficialmente que sospechaba la presencia de minas antipersonal en el antiguo recinto de adiestramiento militar de Wittstock, en el estado de Brandenburgo. Además, Hungría comunicó oficialmente que sospechaba la existencia de minas antipersonal en un tramo de su frontera con Croacia, entre los municipios de Matty y Kölked. Asimismo, un Estado parte, Burundi, que había informado a la REP11 de que había completado la aplicación del artículo 5, notificó posteriormente de manera oficial que sospechaba la presencia de minas en 163 zonas bajo su jurisdicción o control.

4. Hasta la fecha, han notificado oficialmente que todavía deben cumplir con su obligación en virtud del artículo 5, párrafo 1, de la Convención [35] Estados partes, a saber: Afganistán, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, Chad, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Croacia, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Gambia, Hungría, Iraq, Mauritania, Mozambique, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, Senegal, Serbia, Sudán, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de), Yemen y Zimbabwe. Además, el 23 de mayo de 2012, el Níger notificó al Comité Permanente de remoción de minas, divulgación de los riesgos que implican las minas y tecnologías para las actividades relativas a las minas que en el país había una zona, con una superficie de 2.400 m², en la que se sabía que había minas. Asimismo, se recordó que Sudán del Sur había notificado a la REP11 las zonas dentro de su territorio en las que se conocía o se sospechaba la presencia de minas antipersonal. Por su parte, Somalia, para quien la Convención entró en vigor el 1º de octubre de 2012, ha dejado claro que tendrá obligaciones con arreglo al artículo 5.

5. En la Cumbre de Cartagena se acordó que los Estados partes a los que se hubiera concedido una prórroga del plazo inicial en virtud del artículo 5 concluirían la aplicación del artículo 5 a la mayor brevedad posible, pero sin exceder sus plazos prorrogados, velarían por que se avanzara hacia la conclusión de conformidad con los compromisos contraídos en sus solicitudes de prórroga y en las decisiones adoptadas sobre sus solicitudes, e informarían periódicamente sobre sus progresos¹. Desde la REP11, los Estados partes a los que se les concedieron prórrogas han seguido esforzándose por cumplir los compromisos contraídos en la Cumbre de Cartagena.

6. Argelia dispone de una prórroga que vence el 1º de abril de 2017. En su solicitud de prórroga, Argelia se comprometió a despejar varias zonas en 2012: en su frontera occidental se limpiarían seis zonas minadas con una superficie de 130.650 m² en la provincia de Tlemcen y comenzaría el desminado en una zona con una superficie total de 650.000 m² en la provincia de Naama; y en su frontera oriental se limpiarían una zona minada con una superficie de 840.000 m² en la provincia de El-Taref, dos zonas minadas con una superficie total de 900.000 m² en la provincia de Souk Ahras y una zona minada con una superficie de 820.000 m² en la provincia de Tébesa. Argelia indicó además en su solicitud de prórroga que tenía previsto limpiar las siguientes zonas antes de finales de 2014: en la frontera occidental se completaría la tarea de desminado en la provincia de Tlemcen y continuaría en la provincia de Naama. Respecto de la frontera oriental, en la provincia de El-Taref se completarían las labores de desminado en las comunas de El-Taref, Zitouna, Ain-El Karma, Bouhadjjar, Oued Zitoun, Echatt y Ben Mehidi, y comenzarían en Besbes; en la provincia de Souk Ahras se completaría la tarea de desminado en las comunas de Ouilène, Taoura, Sidi Fredj, El Machrouha y Souk Ahras, y

¹ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 13.

comenzaría en Zarouria; y en la provincia de Tébessa se completaría la labor de desminado en las comunas de El Kouif, Ain Zerga, El Meridj y Ouenza, y comenzaría en Tébessa.

7. La Argentina dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2012. La Argentina indicó en su solicitud que, como no ejercía control territorial sobre la zona que había que desminar, el plan presentado como parte de la solicitud era un plan esquemático. La Argentina indicó que este plan sería desarrollado en detalle y aplicado tan pronto como la Argentina ejerciera control sobre las zonas en cuestión o cuando tanto la Argentina como el Reino Unido llegaran a un acuerdo sobre la forma de avanzar en este planteamiento. Desde la REP11, no se han producido cambios en relación con el ejercicio del control sobre las zonas en cuestión.

8. Bosnia y Herzegovina dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2019. En 2012, Bosnia y Herzegovina notificó que seguía habiendo una superficie de 1.312 km² en la que se sospechaba la presencia de minas, incluidos 289 km² de "zonas con riesgo de minas" conocidas. Bosnia y Herzegovina notificó además que estaba reexaminando su plan estratégico para 2009-2019 y que, según los últimos cálculos, la superficie total en la que se sospechaba la presencia de minas se reduciría en 440 km² a finales de 2014. Bosnia y Herzegovina también indicó que estaba acumulando retraso en su plan para concluir la aplicación antes del 1º de enero de 2019, fecha de vencimiento de su prórroga, principalmente debido a la falta de financiación.

9. Camboya dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2020. En su solicitud, Camboya se comprometió a limpiar de minas antipersonal un total de 79.588.349 m² de terreno en 2010 y 2011, y 40.991.940 m² más en 2012. Camboya comunicó que en 2010 y 2011 había recuperado (mediante limpieza y otros medios) 142.836.640 m² de tierras que contenían minas antipersonal y/o minas antivehículo y otros REG. Asimismo, en su solicitud de prórroga había indicado que sería necesario desminar completamente una superficie de aproximadamente 648,8 km² que abarcaba 122 distritos, y que para fines de 2012 el Estado habría concluido la Prospección Básica encaminada a determinar un nuevo nivel de referencia. En diciembre de 2011, Camboya había completado la Prospección Básica en 67 distritos y esperaba terminar la prospección de los distritos restantes a finales de 2012, si bien en mayo de 2012 indicó que seguía sin disponer de financiación para realizar la Prospección Básica en 15 distritos. Camboya indicó también que mediante la Prospección Básica se habían identificado 11.024 zonas en las que se conocía o se sospechaba la presencia de minas antipersonal, que representaban una superficie total de 966.853.922 m². En su solicitud de prórroga, Camboya indicó que esperaba recuperar aproximadamente 83 millones de metros cuadrados durante el período 2013-2014.

10. El Chad dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2014. En su solicitud, el Chad se comprometió a efectuar un reconocimiento general y un reconocimiento técnico a fin de evaluar el problema de las minas en todo el país (excepto en Tibesti) y despejar las zonas muy afectadas donde se sabía que había minas y artefactos sin estallar, en particular aquellas donde los operadores habían comenzado las labores de desminado; crear una nueva sección de desminado o adquirir medios mecánicos para reanudar, en un período de cinco años, el desminado de cuatro zonas del campo de minas que circundaba la base de Wadi Doum, con una superficie total de 4 millones de metros cuadrados; actualizar su base de datos en un plazo aproximado de dos años; una vez terminado el reconocimiento, desminar las zonas donde se sabía de la existencia de minas y artefactos sin estallar, y reanudar las operaciones en el noreste del país. En 2012, el Chad informó de que la primera fase del reconocimiento técnico había abarcado cuatro regiones (N'Yamena, Sila, Salamat y Hadjer-Lamis) y la mayor parte de las zonas sospechosas de otras dos regiones (Borkou y Ennedi). El Chad indicó que las operaciones habían permitido determinar la existencia de zonas sospechosas con una superficie total de 32.743.108 m², localizar y destruir

1.298 minas antipersonal y 1.261 minas antivehículo, y despejar 1.027.506 m² de terreno. El Chad indicó además que la segunda fase del reconocimiento técnico, que debía comenzar en septiembre de 2011, aún no había empezado en mayo de 2012. El Chad recordó que, cuando presentó su solicitud de prórroga de 3 años, esperaba dedicar ese tiempo a conocer con más exactitud la magnitud de la tarea restante, pero el comienzo de las operaciones de reconocimiento y desminado se demoró 12 meses, lo que redujo este período a 2 años. El Chad indicó que tenía previsto presentar un plan de acción revisado a la REP12 sobre la base de los resultados del reconocimiento técnico.

11. Chile dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2020. En su solicitud, Chile se comprometió a desminar en 2011 un total de 19 zonas minadas y a certificar 23 zonas minadas, para lo que tendría que despejar un total de 3.100.836 m² y destruir 10.325 minas antipersonal y 6.694 minas antitanque, y a desminar y certificar en 2012 un total de 24 zonas minadas con una superficie de 1.584.512 m² y destruir 13.270 minas antipersonal y 8.380 minas antitanque. En mayo de 2012, Chile notificó que se había destruido el 27,85% de un total de 181.814 minas, incluidas las 9.785 minas destruidas desde junio de 2011. Chile también indicó que había despejado el 30,45% de los 23.207.281 m² de tierras que debía limpiar, lo que correspondía a la recuperación de 7.066.487 m² de terreno. Entre la REP12 y finales de 2014, Chile espera recuperar otras 45 áreas con una superficie total de 5.607.729 m² y destruir 25.285 minas antipersonal².

12. Colombia dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2021. En su solicitud, Colombia se comprometió a despejar en 2011 un total de 1.440.000 m² de terreno mediante un reconocimiento no técnico y otros 960.000 m² mediante labores de limpieza en 2012, y a recuperar, en 2012, 1.440.000 m² de tierras mediante un reconocimiento no técnico y otros 960.000 m² mediante labores de limpieza. Colombia notificó que 13 de los 14 municipios en los que se iban a realizar intervenciones durante el período 2011-2013 habían recibido cierto grado de asistencia, lo que había permitido desminar 374.000 m² de terreno y destruir 203 artefactos explosivos. En marzo de 2012, San Carlos se convirtió en el primer municipio declarado libre de sospecha en relación con la presencia de minas antipersonal, tras tres años de operaciones que se tradujeron en el desminado de 155.426 m² y la destrucción de 69 artefactos explosivos. Colombia espera que a finales de 2014 se hayan recuperado otros [...] m² mediante un reconocimiento no técnico y [...] m² mediante labores de limpieza, y que la aplicación se haya completado en los municipios de Granada (Antioquia), San Francisco (Antioquia), Samaná (Caldas), San Vicente de Chucurí (Santander), Carmen de Chucurí (Santander) y Zambrano (Bolívar).

13. En su solicitud de prórroga en virtud del artículo 5, Colombia se comprometió a desarrollar y aplicar métodos más eficaces para determinar la ubicación y el tamaño reales de las zonas de presunto peligro en los municipios en los que fuera posible hacerlo. A este respecto, Colombia notificó que se había llevado a cabo una limpieza exhaustiva de la base de datos, que en la actualidad se sabía que 618 municipios registraban cierto grado de contaminación, que se habían descartado 32 municipios que anteriormente se consideraban afectados, y que actualmente la base de datos contenía 19.199 entradas, de las que 18.309 aún no se habían procesado. En su solicitud de prórroga, Colombia se comprometió además a presentar a la REP13 un plan de aplicación revisado que incluyera y tomara en consideración un conocimiento más preciso y confirmado de la ubicación y naturaleza de la contaminación e incluyera proyecciones anuales revisadas de las zonas que habría que desminar, así como sobre la fecha y la forma en que ello se haría. Colombia notificó que estaba en vías de presentar el mencionado plan revisado.

14. El Congo dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2013.

² Este resumen de los progresos previstos de Chile se basa en la información contenida en el anexo 3 de la solicitud de prórroga presentada por Chile en 2011.

15. Croacia dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2019. En la reunión de mayo de 2012 del Comité Permanente de remoción de minas, Croacia indicó que, a finales de 2011, había una superficie de 745 km² que aún no había sido desminada o reducida mediante reconocimientos ni recuperada para ser utilizada por la población civil. Croacia indicó además que, durante los primeros cuatro meses de 2012, las zonas en las que se sospechaba la presencia de minas se habían reducido en 17.902.180 m², de los que 11.939.684 m² habían sido desminados y 5.962.494 m² habían sido descartados mediante un reconocimiento general. Entre la REP12 y finales de 2014, Croacia espera recuperar otros 242 km², incluidos 92 km² mediante labores de desminado, 100 km² mediante un reconocimiento técnico y 50 km² mediante un reconocimiento general³. Además, Croacia espera eliminar por completo la amenaza de minas sobre tierras agrícolas antes de finales de 2013.

16. La República Democrática del Congo dispone de una prórroga que vence el 1º de noviembre de 2012. En su solicitud, la República Democrática del Congo se comprometió a reconocer las 70 zonas del país en las que se sospechaba la presencia de minas antipersonal e indicó que esperaba completar el reconocimiento a finales de 2014. Además, la República Democrática del Congo se comprometió a desminar 12 zonas en las que se sabía que había minas antipersonal. En la reunión de mayo de 2012 del Comité Permanente de remoción de minas, la República Democrática del Congo señaló que 10 de estas 12 zonas han sido declaradas libres de minas mediante el desminado de 340.322,77 m² de terreno. La República Democrática del Congo también indicó que, durante las operaciones de reconocimiento técnico y no técnico, se identificaron 12 nuevas zonas en las que se conocía o se sospechaba la presencia de minas antipersonal.

17. El Ecuador dispone de una prórroga que vence el 1º de octubre de 2017. El Ecuador notificó que, a finales de 2011, quedaban por desminar 42 zonas con una superficie de 1.880.859,50 m² en las que se conocía la presencia de minas. En octubre de 2012, el Ecuador informó a la Dependencia de Apoyo a la Aplicación (DAA) de que hasta la fecha se habían despejado 16 de esas 42 zonas minadas y 26 seguían pendientes. El Ecuador indicó además que esperaba limpiar [...] de las 26 zonas restantes, con una superficie de [...] m², antes de finales de 2014. El Ecuador también indicó que estaba en vías de completar la aplicación dentro de su plazo, que vencía el 1º de octubre de 2017.

18. Eritrea dispone de una prórroga que vence el 1º de febrero de 2015. En su solicitud, Eritrea se comprometió a realizar, en concierto con las labores de desminado en curso, reconocimientos no técnicos y técnicos y a resolver las discrepancias de los datos para determinar con exactitud la tarea restante antes de que finalizase marzo de 2014. En 2012, Eritrea notificó que, de las 751 zonas minadas conocidas que habían sido identificadas por el estudio de los efectos de las minas realizado en Eritrea, se habían recuperado 152 mediante operaciones de desminado y reconocimientos técnicos, con lo que quedaban por despejar 599 zonas minadas. Eritrea notificó además que, durante el primer trimestre de 2012, se habían recuperado 16 km² de terreno, en concreto 33 zonas con una superficie de 3.227.860 m² por remoción y 31 zonas con una superficie de 12.850.318 m² mediante un reconocimiento no técnico. Eritrea también señaló que quedaban por reconocer 82 km² de terreno.

19. Mauritania dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2016. En su solicitud, Mauritania se comprometió a recuperar seis zonas con una superficie total de 11.696.000 m² en 2012. En la reunión de mayo de 2012 del Comité Permanente de remoción de minas, Mauritania informó de que había recuperado 26.080.854 m² de terreno, más del doble de lo previsto, en gran parte debido a la realización de reconocimientos no

³ Este resumen de los progresos previstos de Croacia se basa en la información contenida en la parte 17 de la solicitud de prórroga presentada por Croacia en 2008.

técnicos para cancelar zonas sospechosas, particularmente en la zona de Guemgoum. En Mauritania quedan por despejar 14 zonas minadas, de las que 7, con una superficie total de 3.925.000 m², requieren labores de desminado y otras 7, con una superficie de 31.169.646 m², son sospechosas de contener minas antipersonal. Mauritania tiene previsto despejar las 7 zonas minadas en 2014 y realizar un reconocimiento de las zonas sospechosas restantes a mediados de 2013 si consigue financiación suficiente. Mauritania indicó además que tenía la firme intención de completar la aplicación dentro de su plazo, que vencía el 1º de enero de 2016.

20. Mozambique dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2014. En la reunión de mayo de 2012 del Comité Permanente de remoción de minas, Mozambique notificó que había 40 distritos en 8 provincias (Niassa, Cabo Delgado, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza y Maputo) en los que seguía habiendo 377 zonas minadas con una superficie total de 16.042.136 m². Mozambique indicó además que tenía previsto despejar 254 zonas con una superficie de 8.039.314 m² antes de finales de 2012, lo que le permitiría completar la aplicación en las provincias de Gaza, Cabo Delgado y Niassa, así como en 25 distritos de otras provincias. Mozambique también señaló que en 2012 tenía la intención de movilizar los fondos necesarios para garantizar la finalización de la aplicación en todo el país antes de que venciera su plazo, el 1º de marzo de 2014.

21. El Perú dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2017. El Perú notificó que, durante 2011 y los primeros cuatro meses de 2012, había completado la limpieza de las zonas minadas en torno a prisiones de máxima seguridad y bases de policía, con el desminado de 12.536,5 m² de terreno y la destrucción de 3.897 minas antipersonal y 5 artefactos sin estallar. El Perú también informó de que, durante este período, había despejado 44.851,83 m² de terreno y destruido 1.746 minas antipersonal y 8 artefactos sin estallar en Chiqueiza, Cahuide, Pacahacútec, Huáscar y Sánchez Rancho, en su frontera con el Ecuador. En agosto de 2012, el Perú informó a la DAA de que quedaban por despejar 18 zonas en las que se sabía que había minas antipersonal, con una superficie de 307.111,91 m², y que a finales de 2014 esperaba haber despejado 10 de ellas, con una superficie de 133.383,33 m². El Perú también indicó que estaba en vías de completar la aplicación dentro de su plazo, que vencía el 1º de marzo de 2017, pero avisó de que era posible que se identificaran nuevas zonas minadas a lo largo de su frontera con el Ecuador.

22. El Senegal dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2016. En 2012, el Senegal notificó que había identificado 12 zonas con una superficie de 79.000 m² en las que se conocía la presencia de minas antipersonal, y que quedaban 46 zonas, con una superficie de 3,5 millones de metros cuadrados, en las que se sospechaba que había minas. El Senegal tenía previsto emplear a tres operadores que cubrirían 750.000 m² por año, es decir, 3 millones de metros cuadrados durante los cuatro años que quedaban hasta que venciera su plazo, el 1º de marzo de 2016. El Senegal indicó que esperaba despejar 15 zonas antes de finales de 2014. El Senegal indicó que la conclusión de la aplicación antes de que venciera su plazo, el 1º de enero de 2016, seguía dependiendo de la situación de seguridad y la disponibilidad de suficientes recursos financieros para apoyar la labor de desminado.

23. Tayikistán dispone de una prórroga que vence el 1º de abril de 2020. En 2012, Tayikistán notificó que quedaban por despejar 167 zonas a lo largo de su frontera con el Afganistán, con una superficie de 6,5 km², en las que se conocía la presencia de minas, y 31 zonas en la Región Central, con una superficie de 2,3 km², en las que se conocía la presencia de minas. Sin embargo, Tayikistán observó que la mayoría de estas zonas carecían de descripciones geográficas precisas. Tayikistán también señaló que a finales de 2014 se habrían despejado 4 km² de los 8,8 km² de terreno donde se sabía que había minas. Además, Tayikistán indicó que, si la capacidad y los recursos se mantenían constantes, estaría en condiciones de completar la aplicación dentro de su plazo que vencía el 1º de abril de 2020.

24. Tailandia dispone de una prórroga que vence el 1º de noviembre de 2018. En su solicitud, Tailandia indicó que quedaban por despejar 1.202,25 km² de terreno donde se conocía o se sospechaba la presencia de minas. En 2012, Tailandia notificó que la superficie de la zona contaminada se había reducido a 542,6 km². En su solicitud, Tailandia se comprometió a elaborar procedimientos estándar para reducir las zonas y a poner en práctica un nuevo plan nacional anual de desminado. En 2012, Tailandia señaló que, por primera vez, se estaban aprovechando al máximo los métodos de recuperación de tierras, y que estos métodos habían duplicado la velocidad de recuperación de zonas. Tailandia también señaló que había revisado su estrategia nacional de actividades relativas a las minas y que mantenía su compromiso de hacer todo lo posible por recuperar todas las zonas minadas antes de que venciera su plazo, el 1º de noviembre de 2018. Tailandia observó que el hecho de que las fronteras con sus países vecinos no estuvieran perfectamente delimitadas podría retrasar las actividades de desminado. A este respecto, Tailandia indicó que recientemente Tailandia y Camboya habían acordado encargar a sus respectivos Centros de remoción de minas el desminado de las zonas que convinieran ambas partes en la zona desmilitarizada provisional.

25. El Reino Unido dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2019. En mayo de 2012, el Reino Unido informó de que había completado la fase 2 de su programa piloto de recuperación de tierras e indicó que había recuperado 3,71 km² de terreno donde se sospechaba la presencia de minas, y que en ese proceso había identificado y destruido 79 artefactos sin estallar. El Reino Unido también informó del establecimiento de un Comité de recuperación de zonas de presunto peligro, cuyo propósito era obtener la participación de las autoridades y las comunidades locales en el proceso, proporcionar un mecanismo transparente para exponer la metodología y garantizar la confianza local en los procedimientos y los procesos. El Reino Unido observó que el final del programa había estado marcado por la recuperación oficial de un corral del siglo XIX, delimitado por un muro de piedra, al que la comunidad llevaba 30 años sin poder acceder. Tras la limpieza de 4 zonas presuntamente contaminadas por minas en la fase 1, quedaban por despejar 113 campos de minas (antipersonal y antivehículo) sembradas por la Argentina durante el conflicto de 1982.

26. Venezuela dispone de una prórroga que vence el 1º de octubre de 2014. En su solicitud de prórroga, Venezuela se comprometió a despejar una zona minada con una superficie de 20.000 m² en 2012. Venezuela notificó que en 2012 había desminado una zona con una superficie de 40.000 m² en la zona de la base naval de Isla Vapor, y que en ese proceso había destruido 43 minas. Venezuela también notificó que había desminado 3 zonas con una superficie de 40.000 m² en el Puesto Naval de Cararabo, y que en ese proceso había destruido 316 minas. Venezuela notificó además que en 2013 despejaría 3 zonas minadas con una superficie de 20.000 m² que contenían 299 minas en el Puesto Naval de Atabapo y 2 zonas minadas con una superficie de 40.000 m² que contenían 23 minas en el Puesto Naval de Puerto Páez.

27. El Yemen dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2015. En su solicitud de prórroga, el Yemen indicó que, de los 923.332.281 m² de terreno que debía despejar, en 2008 se habían "completado" 213.054.566,8 m², se habían "descartado" 133.146.458,1 m², el desminado de 363.902.887 m² estaba "en curso" y 213.228.369 m² seguían "pendientes". En la información de transparencia presentada en 2012, el Yemen notificó que, al 31 de marzo de 2012, las labores de desminado de 262 zonas con una superficie de 504.673.393,8 m² se habían "completado", las de 190 zonas con una superficie de 148.271.783 m² se habían "descartado", las de 22 zonas con una superficie de 70.126.785 m² estaban "en curso", las de 111 zonas con una superficie de 139.091.565 m² seguían "pendientes" y las de 10 zonas con una superficie de 61.168.754 m² se habían suspendido.

28. Zimbabwe dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2013. En su solicitud de prórroga, presentada en 2010, Zimbabwe se comprometió a presentar, tras un proceso de reconocimiento, readiestramiento, consolidación de recursos y recaudación de fondos que duraría dos años, una nueva solicitud de prórroga con un plan claro y eficaz para la limpieza definitiva de todos los campos de minas restantes. En su solicitud, presentada en 2012, Zimbabwe indicó que quedaban por despejar 205,85 km² de terreno donde se conocía o se sospechaba la presencia de minas.

29. En la Cumbre de Cartagena se acordó que los Estados partes que hubieran informado de la existencia de zonas minadas bajo su jurisdicción o control harían todo lo posible por identificar, si todavía no lo habían hecho, los perímetros exactos de las ubicaciones de todas las zonas bajo su jurisdicción o control en las que se supiera o se sospechara que había emplazadas minas antipersonal, y comunicar esta información⁴. También se acordó que estos Estados partes harían todo lo posible por asegurar que se utilizaran todos los métodos disponibles, siempre que fuera procedente, formulando y aplicando normas, políticas y procedimientos nacionales pertinentes para despejar tierras por medios técnicos y no técnicos fundamentados y aceptables para las comunidades locales, con la participación de mujeres y hombres en el proceso de aceptación, y proporcionarían información sobre las zonas ya despejadas, desglosadas según se hubieran despejado por remoción, reconocimiento técnico o reconocimiento no técnico⁵. Asimismo, se acordó que esos Estados partes harían todo lo posible para asumir totalmente sus obligaciones dimanantes del artículo 5 formulando, aplicando y revisando periódicamente sus estrategias nacionales de acción antiminas y las políticas, planes, procedimientos presupuestarios y marcos jurídicos conexos, e informar sobre su aplicación al Comité Permanente de remoción de minas, así como para proporcionar anualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, información precisa sobre el número, la ubicación y el tamaño de las zonas minadas, las dificultades concretas de índole técnica u operativa previstas, y los planes para limpiar o despejar de algún otro modo esas zonas⁶. Desde la REP11, estos han seguido trabajando para cumplir sus compromisos dimanantes de la Cumbre de Cartagena.

30. El Afganistán dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2013. En su solicitud de prórroga, presentada en 2012, el Afganistán indicó que, al 30 de junio de 2012, la tarea pendiente incluía 3.847 campos de minas antipersonal con una superficie de 289,4 km², 1.266 campos de minas antitanque con una superficie de 264,95 km² y 155 zonas contaminadas por otros REG con una superficie de 41,91 km². En la solicitud se indicaba que los asociados en la aplicación habían obtenido financiación para limpiar varias de estas zonas contaminadas en los meses posteriores (599 campos de minas antipersonal con una superficie de 31,48 km², 169 campos de minas antitanque con una superficie de 17,88 km² y 58 zonas contaminadas por otros REG con una superficie de 15,03 km²) y que, en algunos casos, las labores de limpieza ya habían comenzado. En la solicitud se indicaba además que, habida cuenta de esto, para que el Afganistán pudiera cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 5 durante el período de prórroga, debería limpiar 3.248 campos de minas antipersonal con una superficie de 257,92 km². Además, el Afganistán tendría que limpiar 1.097 campos de minas antitanque con una superficie de 247,07 km² y 97 zonas contaminadas por otros REG con una superficie de 26,88 km². Entre la REP12 y finales de 2014, el Afganistán espera efectuar el reconocimiento de 16.224

⁴ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 14.

⁵ Plan de Acción de Cartagena, Medidas N° 15 y N° 17.

⁶ Plan de Acción de Cartagena, Medidas N° 16 y N° 17.

comunidades, eliminar 1.412 fuentes de peligro y recuperar 142,66 km² de tierras donde se conoce o se sospecha la presencia de minas antipersonal⁷.

31. Angola dispone de una prórroga que vence el 1º de enero de 2013. En su solicitud de prórroga, presentada en 2012, Angola indicó que, aunque sabía que quedaban por despejar 2.116 zonas en las que se sospechaba la presencia de minas antipersonal, con una superficie total de 793.177.246,68 m², el principal motivo de su solicitud era que todavía no conocía con exactitud el alcance de la contaminación por minas en el país.

32. Bhután dispone de una prórroga que vence el 1º de febrero de 2016. En su informe inicial de transparencia Bhután indicó la existencia y ubicación de dos zonas minadas en los subdistritos de Gobarkunda y Ngamglam, ambos situados en Samdrupjonkhar Dzongkhag, a lo largo de su frontera meridional, que contenían 50 minas MNM-14 y 53 minas M-16. Posteriormente, en la reunión de junio de 2011 del Comité Permanente de remoción de minas, Bhután comunicó que según todos los pronósticos estaría en condiciones de declarar oficialmente el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 5 mucho antes de que venciera su plazo, el 1º de febrero de 2016.

33. Burundi dispone de una prórroga que vence el 1º de abril de 2014. Tras haber anunciado que había completado la aplicación del artículo 5 en la REP11, Burundi comunicó que, en diciembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minería había solicitado al Ministerio de Seguridad Pública que lo ayudara a identificar zonas sospechosas de contener minas antipersonal y otros REG que pudieran encontrarse dentro de las reservas naturales en torno a torres de alta tensión. Burundi comunicó además que el Ministerio de Energía y Minería había entregado una lista de 163 zonas sospechosas en enero de 2012, y se esperaba que los desminadores, con sujeción a los fondos recaudados por el Mines Advisory Group, realizaran un reconocimiento no técnico para confirmar o descartar las sospechas en estas zonas. Burundi indicó que mantenía su compromiso de completar la aplicación antes de que venciera su plazo el 1º de abril de 2014.

34. En su solicitud de prórroga, presentada en 2012, Chipre había indicado que completaría la aplicación en todas las zonas minadas bajo su control efectivo dentro del plazo que vencía el 1º de julio de 2013. Chipre también indicó que, respecto de las zonas que, según había expresado, se encontraban fuera de su control efectivo, volvería a evaluar la situación y [...] a forjarse una opinión sobre si la situación había evolucionado de manera que la República estuviera, o pudiera estarlo en el futuro, en condiciones de destruir todas las minas antipersonal o garantizar su destrucción y de realizar una estimación precisa del tiempo necesario para ello.

35. Etiopía dispone de una prórroga que vence el 1º de junio de 2015. Etiopía indicó que el reconocimiento técnico realizado desde 2007 había confirmado que quedaban 315 zonas de presunto peligro y una superficie de 5,9 km² en la que se había confirmado la presencia de minas. Etiopía notificó que las labores de desminado en estas zonas se prolongarían, como mínimo, hasta finales de 2013. Etiopía notificó además que su Gobierno había decidido transferir la capacidad y el mandato del programa de actividades relativas a las minas al Ministerio de Defensa Nacional porque los campos de minas restantes estaban ubicados principalmente en zonas remotas, en la frontera con Somalia, y resultarían más fácilmente accesibles para el Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, habida cuenta del descenso que estaba acusando la financiación para el desminado, el Ministerio disfrutaba de una mejor posición en materia de presupuestación que el programa civil de actividades relativas a las minas.

⁷ Este resumen sobre los avances previstos en el Afganistán se basa en la información contenida en la parte 17 de la solicitud de prórroga presentada por el Afganistán en 2012.

36. Gambia dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2013. Gambia indicó que, dadas las características de la región fronteriza, particularmente en la parte meridional, limítrofe con la región de Cassamance (Senegal), donde en los dos últimos decenios habían tenido lugar conflictos armados, la población cruzaba libremente la frontera y de ese modo quedaba expuesta al peligro de las minas terrestres. Tal era el caso de una zona limítrofe con la aldea gambiana de Gillanfari, en el distrito de Foni Bintang. Gambia informó también de que mantenía la colaboración con los asociados para impartir educación sobre el peligro de las minas en las comunidades de las zonas afectadas, y poseía un equipo de desminado humanitario bien adiestrado y completamente equipado, y en disposición permanente para responder a cualquier emergencia.

37. Alemania comunicó que, gracias a una investigación histórica, la zona sospechosa de contener minas antipersonal, que anteriormente abarcaba prácticamente todo el recinto de adiestramiento miliar de Wittstock (aproximadamente 144 km²) había quedado reducida a 12.000 m². Esta zona había sido utilizada por la infantería de las fuerzas armadas de la antigua Unión Soviética, por lo que no podía descartarse la presencia de minas antipersonal. Alemania notificó que su prioridad era realizar un reconocimiento técnico de la zona, para lo que era necesario disponer de la infraestructura necesaria (como, por ejemplo, vías de acceso de emergencia). Alemania también señaló que tenía la intención de completar el reconocimiento técnico y, de ser necesario, destruir todas las minas antipersonal en la zona sospechosa dentro del plazo estrictamente necesario, e indicó que presentaría un plan de acción antes de la REP12.

38. Hungría señaló que se había completado el reconocimiento de todas las zonas situadas en la frontera con Croacia en las que se sospechaba que había minas antipersonal, cuya superficie era de 1.007.747 m². Hungría señaló además que había creado una base de datos sobre minas que contenía información detallada (incluida la propiedad) sobre la zona, se habían colocado 350 señales de advertencia, y las labores de desminado comenzarían en cuanto se completara el proceso de licitación internacional. Hungría indicó que estaba en vías de completar el desminado dentro del plazo previamente comunicado (antes del 31 de agosto de 2013).

39. El Iraq dispone de una prórroga que vence el 1º de febrero de 2018. En la información proporcionada en mayo de 2009 al Comité Permanente de Remoción de Minas, el Iraq indicó que aún no se conocía con exactitud la superficie contaminada y que había 3.673 zonas sospechosas de contener minas antipersonal o de ser peligrosas. En la información proporcionada en mayo de 2012 al Comité Permanente de Remoción de Minas, el Iraq indicó que se había iniciado un reconocimiento no técnico en la provincia de Thi-Qar, basado en la confirmación de las zonas de presunto peligro identificadas por el estudio de los efectos realizado en 2004-2006. El Iraq indicó además que el plan del Ministerio de Medio Ambiente para 2012 también incluía la finalización del proyecto de reconocimiento no técnico en las tres provincias meridionales supervisadas por el Centro regional de remoción de minas (Basora, Mayssan y Muthanna).

40. Serbia dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2014. En 2012, Serbia informó de que quedaban 10 zonas con una superficie de 1.385.215 m² en las que se sabía que había minas antipersonal, y 53 zonas con una superficie aproximada de 2.000.000 m² sospechosas de contener minas antipersonal. Serbia informó además de que se realizaría un reconocimiento de las zonas sospechosas antes del 1º de julio de 2013 para confirmar o descartar la presencia de minas. Serbia notificó asimismo que, debido a la incertidumbre en cuanto a la financiación, no estaba en condiciones de asegurar que completaría la aplicación antes de que venciera su plazo, el 1º de marzo de 2014.

41. El Sudán dispone de una prórroga que vence el 1º de abril de 2014. En la información proporcionada en mayo de 2012 al Comité Permanente de Remoción de Minas, el Sudán indicó que en 2011 se habían identificado 74 nuevas zonas peligrosas, y

que en los dos años siguientes habría que limpiar 294 zonas peligrosas conocidas. El Sudán también indicó que podrían identificarse nuevas zonas peligrosas para ser despejadas y reconocidas, aunque no se esperaba que su número fuera elevado. El Sudán indicó además que los equipos de desminado que trabajaban en el país no bastaban para completar la aplicación dentro del plazo que vencía el 1º de abril de 2014, por lo que necesitaría una prórroga. El Sudán informó de que la inestable situación de la seguridad en los dos estados (Nilo Azul y Kordofán del Sur) hacía que las operaciones de desminado no pudieran comenzar en esas zonas.

42. Turquía dispone de una prórroga que vence el 1º de marzo de 2014. En 2012, Turquía comunicó que seguía habiendo 449.890 minas antipersonal a lo largo de la frontera meridional con Siria y un total de 363.448 minas en otras zonas, la mayoría de ellas a lo largo de las fronteras con Armenia, el Irán y el Iraq. Turquía comunicó además que, en el contexto del Proyecto de desminado de la frontera con Siria, se habían completado los preparativos del documento de licitación para las actividades de desminado en la primera región abierta a licitación entre Cizre y Çobanbey, con una extensión de 527 km, se había invitado al proceso de licitación a 20 sociedades mixtas, y se esperaba completar esta actividad de desminado durante 2016. Turquía también informó de que el proceso de licitación de la segunda región entre Çobanbey y Denizgören, con una extensión de 384 km, comenzaría una vez validado el contrato para la primera región sometida a licitación, e indicó que estaba previsto completar las operaciones en este sector a finales de 2016. Turquía indicó que esperaba financiar la mayoría de sus actividades de desminado con sus propios recursos, y que el desminado de las fronteras con Armenia y el Irán estuviera parcialmente financiado por fuentes de la Unión Europea, y señaló que las minas colocadas en zonas alejadas de las fronteras estaban siendo eliminadas por las Fuerzas Armadas turcas con arreglo a sus propias prioridades. Turquía indicó además que el Ministerio de Defensa Nacional había iniciado los procedimientos legales para el establecimiento de una Autoridad nacional encargada de las actividades relativas a las minas y un Centro de remoción de minas.

43. La REP11 observó que la Convención no decía nada sobre la manera de afrontar situaciones en las que Estados partes que nunca habían presentado información en cumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo 5 descubrieran zonas minadas hasta entonces desconocidas. La REP11 observó además la necesidad de preparar una respuesta racional a esas situaciones que estuviera firmemente asentada en el objeto y propósito de la Convención y que no socavara las obligaciones jurídicas de destruir todas las minas antipersonal en las zonas minadas lo antes posible. En este contexto, la Reunión pidió que el Presidente, con el apoyo del Comité de Coordinación, consultara a todos los interesados pertinentes para preparar un debate constructivo sobre esta cuestión en las reuniones de mayo de 2012 de los Comités Permanentes, con vistas a presentar recomendaciones sobre el asunto para su examen en la REP12. [...]

44. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes recordaron las decisiones adoptadas en la Séptima Reunión de los Estados Partes (REP7) a fin de establecer un proceso para la preparación, presentación y examen de solicitudes de prórroga de los plazos en virtud del artículo 5, tomaron nota del esquema propuesto proporcionado por la DAA para ayudar a los Estados partes solicitantes a organizar el contenido de sus solicitudes, y expresaron la opinión de que el proceso de preparación, presentación y examen de las solicitudes de prórroga se había traducido en el establecimiento de un calendario ordenado y previsible para la presentación, análisis y examen de las solicitudes de prórroga. En relación con estas solicitudes, en la Cumbre de Cartagena se acordó que los Estados partes que hubieran notificado la existencia de zonas minadas bajo su jurisdicción o control pero que, por circunstancias excepcionales, necesitaran solicitar una prórroga del plazo de diez años informarían oportunamente a los Estados partes de estas circunstancias excepcionales, elaborarían la solicitud de prórroga con arreglo a las recomendaciones formuladas por la

REP7 y aprovecharían la oportunidad de entablar un diálogo oficioso con el grupo encargado de examinar la solicitud de prórroga⁸.

45. En el Informe de Phnom Penh sobre la marcha de los trabajos se recordó la importancia de la presentación oportuna de las solicitudes de prórroga para la eficacia general del proceso de prórroga del artículo 5 y, en ese contexto, se recomendó que todos los Estados partes que desearan presentar solicitudes lo hicieran a más tardar el 31 de marzo del año en que se fuera a examinar la solicitud (es decir, el año anterior al vencimiento del plazo para el Estado parte). Desde la REP11, el Presidente ha recibido solicitudes del Afganistán (29 de marzo de 2012), Angola (30 de marzo de 2012), Chipre (30 de abril de 2012) y Zimbabwe (30 de marzo de 2012). De conformidad con las decisiones de la REP7, el Presidente informó a los Estados partes de la recepción de esas solicitudes y pidió a la DAA que las pusiera a disposición de todas las partes interesadas en el sitio web de la Convención.

46. Tras los compromisos formulados en la Cumbre de Cartagena, los representantes de cada Estado parte solicitante y el grupo encargado de analizar las solicitudes de prórroga entablaron un diálogo oficioso con miras a procurar que el grupo de análisis obtuviese una mejor comprensión de las solicitudes y ofreciese asesoramiento y propuestas a los Estados partes solicitantes. Este proceso cooperativo permitió a los Estados partes solicitantes aclarar muchas cuestiones sobre sus solicitudes. Dos de ellos (el Afganistán, el 31 de agosto de 2012, y Zimbabwe, el 25 de octubre de 2012) presentaron solicitudes revisadas y mejoradas.

47. Se señaló que no había presentado solicitudes de prórroga el siguiente Estado parte, cuyo plazo fijado con arreglo al artículo 5 vencía en 2013: Gambia. Se señaló también que presentarían solicitudes de prórroga en 2013 los siguientes Estados partes, cuyos plazos vencen en 2014: Chad, Sudán y Turquía. Se señaló además que otros cinco Estados partes tienen plazos que vencen en 2014: Burundi, Congo, Mozambique, Serbia y Venezuela.

48. La REP11 observó que el proceso de solicitud de prórroga previsto en el artículo 5 suponía una gran carga para los representantes de los Estados partes que tenían el mandato de analizar las solicitudes y, en ese contexto, recomendó que los Estados partes que tenían ese mandato en 2012 reflexionaran sobre el proceso hasta la fecha, a fin de determinar métodos eficaces para preparar solicitudes y análisis de gran calidad y presentar recomendaciones al respecto para su examen por la REP12. En septiembre de 2012, los Estados partes encargados de analizar las solicitudes presentaron sus recomendaciones a la REP12 para que esta las examinara.

49. A fin de aumentar los conocimientos y fomentar la capacidad de los representantes de los Estados partes encargados de analizar las solicitudes, la DAA organizó un taller para ellos el 30 de marzo de 2012.

50. La REP11 observó con satisfacción los esfuerzos desplegados conforme a la decisión de la REP10 de pedir al Comité de Coordinación que organizara la semana de reuniones de los Comités Permanentes en 2011 asignando tiempo para que los Copresidentes y los Estados partes, entre otros, experimentaran nuevas maneras de utilizar el programa de trabajo entre períodos de sesiones para prestar una mayor atención a los contextos nacionales o apoyar de forma creativa los progresos en la aplicación del Plan de Acción de Cartagena. La REP11 alentó al Comité de Coordinación a que estudiara la posibilidad de desplegar esfuerzos similares en 2012. A esos efectos, los Copresidentes del Comité Permanente de Remoción de Minas, Divulgación de los Riesgos que Implican las Minas y Tecnologías para las Actividades relativas a las Minas, Indonesia y Zambia, utilizaron un formato de grupos pequeños para promover, en un foro interactivo, debates

⁸ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 21.

profundos en materia de cooperación sobre los progresos realizados y el camino por recorrer de dos Estados partes (Bosnia y Herzegovina y Chad) que están cumpliendo los compromisos contraídos en sus solicitudes de prórroga en virtud del artículo 5.

51. Como se ha indicado, en la Cumbre de Cartagena los Estados partes convinieron en asegurar que se utilizaran todos los métodos disponibles para lograr la aplicación plena y oportuna del artículo 5 1) siempre que fuera procedente, formulando y aplicando normas, políticas y procedimientos nacionales pertinentes para despejar tierras por medios técnicos y no técnicos fundamentados y aceptables para las comunidades locales, con la participación de mujeres y hombres en el proceso de aceptación⁹. Desde la REP11, el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG) ha apoyado, en el contexto de su programa de recuperación de tierras, a Camboya, Colombia, Jordania, Mozambique, Sudán del Sur y Tailandia en la elaboración o el perfeccionamiento de un política nacional y de normas nacionales sobre las actividades relativas a las minas que incluyan capítulos sobre la recuperación de tierras por medios no técnicos y técnicos.

52. Como se ha indicado, en la Cumbre de Cartagena los Estados partes se comprometieron a asumir totalmente sus obligaciones dimanantes del artículo 5 formulando, aplicando y revisando periódicamente sus estrategias nacionales de desminado y las políticas, planes, procedimientos presupuestarios y marcos jurídicos conexos¹⁰. Desde la REP11, el CIDHG ayudó a Sudán del Sur a elaborar su estrategia nacional de desminado para el período 2012-2016 mediante la organización de talleres participativos y la redacción de la estrategia. El apoyo del CIDHG a la República Democrática del Congo consistió en prestar asistencia en la elaboración de un plan de desminado plurianual. A petición de la DAA, el CIDHG prestó asistencia y asesoramiento al Chad para determinar cuáles eran las zonas en las que se conocía o se sospechaba la presencia de artefactos peligrosos, cuantificar el problema respecto de su ubicación, verificar los datos relativos a la contaminación y actualizar su base de datos.

IV. Asistencia a las víctimas

53. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes, si bien observaron que se había avanzado en la consecución del objetivo de la Convención relativo a la asistencia a las víctimas, reconocieron que los progresos más notables habían sido los relativos a los procedimientos, y que el verdadero objetivo de la Convención era cambiar la situación sobre el terreno y mejorar las vidas de los supervivientes y las familias de las personas muertas o heridas, así como de sus comunidades¹¹. Los Estados partes expresaron la opinión de que era necesario abordar el problema persistente de traducir la mejor comprensión de la asistencia a las víctimas en mejoras tangibles en la calidad de la vida cotidiana de las víctimas de las minas. Para tal fin, los Estados partes manifestaron su determinación de prestar a las víctimas de las minas una asistencia adecuada, que tuviera en cuenta los aspectos relacionados con la edad y el género, mediante un enfoque holístico e integrado que incluyera la atención médica continua y de urgencia, la rehabilitación física, el apoyo psicológico y la reintegración social y económica, de conformidad con el derecho internacional humanitario y la normativa de derechos humanos aplicable, con el objetivo de asegurar la plena y eficaz participación e inclusión de esas personas en la vida social, cultural, económica y política de sus comunidades¹². También con este fin, los Estados partes, en especial los que tienen la responsabilidad del bienestar de un número importante

⁹ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 15.

¹⁰ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 16.

¹¹ Examen del funcionamiento y el estado de la Convención: 2005-2009, párr. 112.

¹² Plan de Acción de Cartagena, párr. 12.

de víctimas de las minas y deben responder ante ellas, acordaron intensificar sus esfuerzos y hacer todo lo posible por facilitar avances mensurables aplicando 11 medidas específicas sobre la asistencia a las víctimas recogidas en el Plan de Acción de Cartagena¹³. Desde la REP11, estos han seguido trabajando para cumplir sus compromisos dimanantes de la Cumbre de Cartagena.

54. Al observar que los Estados partes se encontraban aproximadamente a medio camino entre la Cumbre de Cartagena por un mundo libre de minas, celebrada en 2009, y la Tercera Conferencia de Examen de la Convención, prevista en 2014, los Copresidentes del Comité Permanente de asistencia a las víctimas, Argelia y Croacia, destacaron que cabía la posibilidad de preparar una evaluación de mitad de período del Plan de Acción de Cartagena en 2012. Esta evaluación de mitad de período fue presentada por los Copresidentes a la REP12 como documento [...]. A continuación figura un resumen de la información contenida en esta evaluación de mitad de período de la aplicación de los aspectos del Plan de Acción de Cartagena relacionados con la asistencia a las víctimas.

55. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en asegurar la inclusión y la participación plena y activa de las víctimas de las minas y de sus organizaciones representativas, así como de los demás interesados en las actividades relacionadas con la asistencia a las víctimas¹⁴. Desde la Cumbre de Cartagena, han comunicado que han realizado progresos para asegurar la participación plena y activa de los supervivientes y otras personas con discapacidad en la elaboración de planes, marcos jurídicos, políticas y otros procesos nacionales pertinentes los siguientes Estados partes: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Colombia, Etiopía, Iraq, Jordania, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Serbia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Tayikistán y Uganda.

56. Entre las actividades realizadas para asegurar la participación plena y activa de los supervivientes y otras personas con discapacidad en la elaboración de planes, marcos jurídicos, políticas y otros procesos nacionales destacan las siguientes: el Senegal informó del establecimiento de un comité para la elaboración de su plan de acción nacional para la asistencia a las víctimas, que incluía la participación plena y activa de la Asociación Senegalesa de Víctimas de las Minas, así como de los ministerios gubernamentales competentes y otros interlocutores pertinentes. Colombia señaló que había promulgado leyes para garantizar la participación de los supervivientes de las minas y otros REG en la elaboración de directrices para el plan de acción nacional y en su aplicación a escala nacional y regional. Tayikistán, por conducto del centro de remoción de minas apoyado por el PNUD, indicó que había contribuido al establecimiento de dos organizaciones de supervivientes en el país y al fortalecimiento de su capacidad, entre otras cosas impartiendo cursos de idiomas e informática a su personal y proporcionándoles equipos informáticos y material de oficina. Croacia informó de que la participación activa y continua de los supervivientes de las minas y otros REG y de otras personas con discapacidad en los procesos pertinentes se había visto potenciada tras la inclusión de cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) en el órgano nacional de coordinación de la asistencia a las víctimas y la discapacidad.

57. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en fomentar la colaboración y la cooperación entre los ministerios gubernamentales competentes, las organizaciones de personas con discapacidad, los organismos gubernamentales y las ONG a fin de garantizar la asistencia a los supervivientes de las minas y a sus familias y comunidades desde un planteamiento holístico e integrado¹⁵. Los siguientes Estados partes

¹³ Plan de Acción de Cartagena, Medidas N° 23 y N° 33.

¹⁴ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 23.

¹⁵ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 24.

han informado de la existencia de un mecanismo de coordinación interministerial/intersectorial para la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas, planes y marcos jurídicos pertinentes: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Colombia, Iraq, Jordania, Mozambique, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Serbia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Tayikistán y Uganda. Algunos de los Estados partes que indicaron haber establecido un mecanismo de coordinación señalaron que el mecanismo de coordinación de la asistencia a las víctimas estaba dirigido por la entidad nacional responsable de la discapacidad en el Estado, a la que se le había delegado la responsabilidad en materia de asistencia a las víctimas. En esos casos, este órgano nacional para la discapacidad tenía el mandato de tomar en consideración las actividades y obligaciones en materia de asistencia a las víctimas a la hora de coordinar, elaborar y supervisar políticas, planes y programas sobre discapacidad. En algunos casos, Estados partes notificaron el establecimiento de mecanismos de coordinación específicos para la asistencia a las víctimas, como un subcomité o un grupo de trabajo, que estaban dirigidos por el centro nacional de remoción de minas pero incluían la participación activa de los ministerios competentes y otras entidades.

58. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en recopilar todos los datos necesarios, desglosados por sexo y edad, a fin de elaborar, aplicar, vigilar y evaluar políticas, planes y marcos jurídicos nacionales adecuados, entre otras cosas determinando las necesidades y prioridades de las víctimas de las minas y la disponibilidad y calidad de los servicios pertinentes, poner esos datos a disposición de todos los interesados y velar por que esos esfuerzos contribuyeran a los sistemas nacionales de seguimiento de personas heridas y otros sistemas pertinentes de reunión de datos, para su uso en la planificación de programas¹⁶. Desde la Cumbre de Cartagena, los siguientes Estados partes han comunicado que han mejorado su capacidad para comprender la magnitud de los problemas que plantea la atención a los derechos y las necesidades de las víctimas de las minas: Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Colombia, Croacia, Etiopía, Jordania, Mozambique, Perú, Senegal, Serbia, Sudán, Tayikistán y Uganda. Los siguientes Estados partes han comunicado que han avanzado en la incorporación de los datos sobre la asistencia a las víctimas en el sistema nacional de información sanitaria y/o el sistema nacional de seguimiento de los casos de las personas heridas: Camboya, Croacia, Etiopía, Mozambique y Serbia.

59. Entre las iniciativas emprendidas para mejorar la labor de recopilación de datos destacan las siguientes: Etiopía informó de que había establecido una dependencia dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que analistas de datos se encargaban a tiempo completo de recopilar y difundir información sobre las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas y otros REG, y la disponibilidad de servicios en todo el país. Camboya notificó que el Ministerio de Asuntos Sociales, Excombatientes y Juventud estaba estableciendo un sistema de gestión de pacientes que, entre otras cosas, tendría la capacidad de registrar el número de personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas y otros REG, que hubieran sido atendidos en centros de rehabilitación física. Croacia estableció un grupo de trabajo para aplicar el Acuerdo de cooperación para la elaboración de una base de datos unificada y el intercambio de datos y su correspondiente Protocolo sobre métodos para mantener registros sobre víctimas de minas/artefactos sin estallar. En virtud de este acuerdo, todas las instituciones y organizaciones que tengan información sobre las víctimas de minas/artefactos sin estallar deberán transmitirla al Instituto Nacional de Salud Pública de Croacia para la creación de una base de datos unificada. Uganda elaboró un censo de población y vivienda, que se llevará a cabo en 2013, para recopilar datos sobre las personas discapacitadas, incluidos los supervivientes de las minas y otros REG.

¹⁶ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 25.

60. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes recordaron la importancia de elaborar, o examinar y modificar si fuera necesario, leyes y políticas adecuadas para promover los derechos, la accesibilidad, un tratamiento médico de calidad, unos servicios de salud adecuados, la protección social y la no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas y otros REG¹⁷. Desde la Cumbre de Cartagena, han informado de que han promulgado leyes o políticas nacionales que promueven y garantizan los derechos de las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas, los siguientes Estados partes: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Colombia, Eritrea, Etiopía, Jordania, Mozambique, Perú, Senegal, Sudán, Tayikistán y Uganda. Además, han comunicado que han realizado una evaluación de los marcos jurídico y político nacionales para determinar si satisfacen efectivamente las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas, los siguientes Estados partes: Albania.

61. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en elaborar y aplicar, si todavía no lo habían hecho, un plan de acción y presupuesto integral que abordara los derechos y necesidades de las víctimas de las minas mediante objetivos que fueran específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos, velando por que dicho plan se integrara en las políticas, los planes y los marcos jurídicos nacionales más amplios que correspondiera¹⁸. Desde la Cumbre de Cartagena, han indicado que han establecido un plan de acción o una estrategia nacional para satisfacer los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, incluidas las víctimas de las minas, los siguientes Estados partes: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, Chad, Colombia, Croacia, Eritrea, Etiopía, Jordania, Mozambique, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Sudán, Tailandia, Tayikistán, Uganda y Yemen. Cuatro de estos Estados partes indicaron que estaban renovando su plan de acción nacional: Afganistán, Perú, Tayikistán y Uganda. Además, tres Estados partes indicaron que habían comenzado el proceso de elaboración de un nuevo plan: Iraq, Serbia y Sudán del Sur. Unos pocos Estados partes especificaron si habían establecido un presupuesto para la aplicación del plan o si las actividades enumeradas en el plan iban a integrarse en los presupuestos y planes de trabajo de los ministerios y organismos pertinentes.

62. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en vigilar y evaluar continuamente los progresos realizados en la asistencia a las víctimas en el marco de las políticas, los planes y los marcos jurídicos nacionales más amplios para cerciorarse de que las actividades estuvieran influyendo de manera tangible en la calidad de vida de las víctimas de las minas y de otras personas con discapacidad¹⁹. De los 20 Estados partes que comunicaron que habían establecido un plan de acción o política nacional, los siguientes indicaron que habían establecido un sistema de supervisión complementario para permitir la evaluación periódica de las políticas, los planes y los marcos jurídicos nacionales: Afganistán, Albania, Camboya, Colombia, Mozambique, Sudán, Tayikistán y Uganda. Entre las actividades realizadas para supervisar los esfuerzos por satisfacer los derechos y las necesidades de las víctimas de las minas destacan las siguientes: Camboya informó de que había establecido una dependencia de supervisión, evaluación y preparación de informes, encargada de supervisar los progresos realizados en la aplicación del plan de acción nacional junto con otras políticas y leyes pertinentes. La dependencia ha llevado a cabo un examen de la labor realizada por Camboya para aplicar su plan de acción nacional y ha formulado recomendaciones que alimentarán el proceso de desarrollo de la política nacional del país en materia de discapacidad. Uganda elaboró un instrumento de

¹⁷ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 26.

¹⁸ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 27.

¹⁹ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 28.

supervisión que establece indicadores, bases de referencia y objetivos claros para medir y evaluar los resultados e informar de los progresos de forma permanente.

63. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en velar por la participación continua y la contribución efectiva, en todas las actividades pertinentes relacionadas con la Convención, de expertos en los derechos relativos a la salud, la rehabilitación, los servicios sociales, la educación, el empleo, el género y la discapacidad, incluidos expertos que fueran supervivientes de las minas y otros REG, entre otras cosas apoyando la inclusión de esos expertos en sus delegaciones²⁰. Desde la Cumbre de Cartagena, han incluido a esos expertos en las delegaciones que envían a las reuniones oficiales de la Convención los siguientes Estados partes: Afganistán, Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, Chad, Colombia, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Iraq, Jordania, Mozambique, Nicaragua, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Serbia, Sudán, Tailandia, Tayikistán, Uganda y Yemen. Además, los siguientes Estados partes incluyeron a un experto en asistencia a las víctimas en la delegación oficial que enviaron a la REP12. [...]

64. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en fortalecer la implicación nacional y elaborar y ejecutar planes de fomento de la capacidad y formación para promover y mejorar la capacidad de las mujeres, los hombres y las asociaciones de víctimas, otras organizaciones y las instituciones nacionales encargadas de prestar servicios y aplicar las políticas, los planes y los marcos jurídicos nacionales pertinentes, en reconocimiento de que la sostenibilidad a largo plazo de los programas y servicios requería la implicación nacional, una infraestructura adecuada y recursos humanos, técnicos y financieros, y observaron que se había determinado que la imposibilidad de hacer frente a la discapacidad a todos los niveles, incluso en los sectores gubernamental y no gubernamental, era un importante obstáculo que impedía avanzar en la atención de los derechos y las necesidades de los supervivientes. Desde la Cumbre de Cartagena, los siguientes Estados partes han informado de que han emprendido iniciativas para reforzar la implicación nacional y fomentar la capacidad: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, Colombia, Croacia, Etiopía, Jordania, Mozambique, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Tayikistán y Uganda.

65. Entre las actividades realizadas para fomentar la capacidad destacan las siguientes: Albania informó del establecimiento de un programa de educación continua para las facultades de la universidad nacional, a fin de fomentar la capacidad de rehabilitación nacional. El Sudán notificó que se impartía formación a las ONG que participaban en la prestación de servicios de asistencia a las víctimas. Uganda informó de la elaboración de manuales de formación para fomentar la capacidad en los distintos niveles de gobierno. Entre las actividades realizadas para reforzar la implicación nacional destacan las siguientes: el Perú informó de un aumento en el presupuesto nacional en 2012 para la aplicación de planes y programas para personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas y otros REG.

66. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes convinieron en sensibilizar a las víctimas de las minas sobre sus derechos y sobre los servicios disponibles, y concienciar también a las autoridades gubernamentales, los proveedores de servicios y el público en general para promover el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de las minas²¹. Desde la Cumbre de Cartagena, han informado de que han realizado actividades de concienciación a escala nacional los siguientes Estados partes: Afganistán, Albania, Burundi, Camboya, Colombia, Croacia, Etiopía, Iraq, Jordania, Mozambique, Perú, República Democrática del Congo, Senegal,

²⁰ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 29.

²¹ Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 32.

Serbia, Sudán, Tailandia, Tayikistán y Uganda. Entre las actividades de concienciación realizadas destacan las siguientes: Bosnia y Herzegovina informó de que había creado un portal web sobre asistencia a las víctimas para divulgar información sobre los derechos y los servicios disponibles. Camboya señaló que había realizado campañas de educación a través de diferentes medios de comunicación, como carteles, la televisión y la radio. Colombia informó de que impartía cursos sobre los derechos de los supervivientes de las minas y otros REG en las zonas afectadas. El Sudán organizó varios talleres en todo el país para promocionar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

67. Desde la Cumbre de Cartagena, los Estados partes han observado diversos problemas en sus esfuerzos por aplicar el Plan de Acción de Cartagena, entre los que cabe citar los siguientes: el acceso a las zonas remotas y rurales para realizar actividades o prestar servicios sigue planteando problemas en muchos países afectados por las minas. En muchos casos, las infraestructuras físicas son limitadas. A menudo existe falta o escasez de recursos técnicos, financieros y humanos para realizar las actividades. Con frecuencia se observa una falta de compromiso y/o capacidad para abordar las cuestiones relativas a la discapacidad en los sectores gubernamental y no gubernamental. Los métodos de supervisión y evaluación de los planes y servicios siguen caracterizándose por su poca solidez y su escaso desarrollo. En los ministerios competentes, las cuestiones relativas a la discapacidad siguen considerándose más una cuestión de beneficencia que de derechos humanos. Además, pese al establecimiento de un mecanismo nacional de coordinación, la colaboración efectiva entre los ministerios competentes y otros agentes esenciales en la esfera de la discapacidad sigue siendo limitada.

68. Al examinar los progresos alcanzados a mitad de período en la aplicación del Plan de Acción de Cartagena, los Estados partes observaron que estaba previsto que hubiera más avances antes de la Tercera Conferencia de Examen en diversos ámbitos, como la elaboración de directrices nacionales sobre accesibilidad para las personas con discapacidad, la labor de sensibilización, la capacidad nacional para la rehabilitación física, la supervisión y evaluación de políticas nacionales de discapacidad, y la inclusión de la categoría "supervivientes de las minas" en el censo nacional. Los objetivos expresados por los Estados partes afectados figuran en la evaluación de mitad de período de la aplicación de las disposiciones relativas a la asistencia a las víctimas (documento N° ...).

69. En 2012, al margen de las reuniones de los Comités Permanentes, celebradas en mayo, y de la REP12, en diciembre, los Copresidentes, con el apoyo de la DAA y en colaboración con la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organizaron programas paralelos para expertos en asistencia a las víctimas, cuyo objetivo era potenciar la labor nacional de coordinación y supervisión de la aplicación de los planes nacionales. Suiza proporcionó la financiación necesaria para celebrar el programa paralelo a la REP12. Estos fondos permitieron la prestación de servicios de interpretación en árabe, español, francés e inglés, y la participación de un experto internacional que impartió una sesión de formación en materia de supervisión y evaluación de los planes de acción nacionales sobre la discapacidad.

70. En la Cumbre de Cartagena se reconoció que uno de los principales avances en la asistencia a las víctimas había sido la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que constituía una nueva norma de derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Se reconoció que la exhaustividad con la que la Convención consignaba la labor que debía llevarse a cabo para promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad, en particular los supervivientes de las minas, en la vida social, cultural, económica y política de sus comunidades, constituía un nuevo rasero con el que medir la magnitud de las iniciativas de asistencia a las víctimas. En la Cumbre de Cartagena, los Estados partes recordaron los

vínculos que existían entre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la asistencia a las víctimas, particularmente los seis componentes, y reconocieron que la Convención podía facilitar un marco para que todos los Estados partes cumplieran sus responsabilidades respecto de los supervivientes de las minas y sus familias. Hasta la fecha, 100 Estados partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidos 15 Estados partes responsables de un importante número de supervivientes de minas: Bosnia y Herzegovina, Colombia, Croacia, El Salvador, Etiopía, Jordania, Mozambique, Nicaragua, Perú, Senegal, Serbia, Sudán, Tailandia, Uganda y Yemen.

71. Como ya se indicó, la REP11 observó con satisfacción los esfuerzos desplegados, conforme a la decisión de la REP10, para pedir al Comité de Coordinación que organizara la semana de reuniones de los Comités Permanentes en 2011 de forma que se asignara tiempo para que los Copresidentes, los Estados partes a título individual y otros interesados, experimentaran las nuevas maneras de utilizar el programa de trabajo entre períodos de sesiones para prestar una mayor atención a los contextos nacionales o apoyar de forma creativa por otros medios los progresos en la aplicación del Plan de Acción de Cartagena. La REP11 alentó al Comité de Coordinación a que estudiara la posibilidad de desplegar esfuerzos similares en 2012. A esos efectos, los Copresidentes del Comité Permanente de asistencia a las víctimas utilizaron un formato de grupos pequeños para promover, en un foro interactivo, debates profundos en materia de cooperación sobre los progresos realizados y el camino que tenían ante sí los dos Estados partes (República Democrática del Congo e Iraq), tras haber asumido responsabilidades sobre un número significativo de supervivientes de las minas.

72. Como se ha señalado, en la Cumbre de Cartagena los Estados partes convinieron en recopilar todos los datos necesarios, desglosados por sexo y edad, a fin de elaborar, aplicar, vigilar y evaluar políticas, planes y marcos jurídicos nacionales adecuados, entre otras cosas determinando las necesidades y prioridades de las víctimas de las minas y la disponibilidad y calidad de los servicios pertinentes, poner esos datos a disposición de todos los interesados y velar por que esos esfuerzos contribuyeran a los sistemas nacionales de seguimiento de personas heridas y otros sistemas pertinentes de reunión de datos, para su uso en la planificación de programas²². Desde la REP11, el CIDHG y el Centre for International Stabilization and Recovery (CISR) de la Universidad James Madison iniciaron un estudio sobre los sistemas de información sobre accidentes y víctimas, destinado a facilitar la comprensión de cómo se recogen, compilan y analizan los datos relativos a las víctimas, y cómo se utilizan estos datos para diseñar y estructurar las operaciones de desminado. Este estudio proporcionará enseñanzas a los Estados partes que deseen mejorar sus prácticas y sistemas de gestión de la información para coordinar, supervisar y evaluar sus planes de acción sobre asistencia a las víctimas. También podrá informar acerca de las diversas posibilidades de que esos sistemas se conviertan en plataformas para la elaboración de programas nacionales más amplios sobre discapacidad.

²² Plan de Acción de Cartagena, Medida N° 25.